



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

DON JAIME VELÁZQUEZ VIOQUE, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión nº 32/04 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 9 de septiembre de 2004, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el que se aprueba la:

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTIMA PARCIALMENTE EL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LAS ENTIDADES CABLEUROPA, S.A.U., REGIÓN DE MURCIA DE CABLE, S.A.U., VALENCIA DE CABLE, S.A., MEDITERRÁNEA NORTE SISTEMAS DE CABLE, S.A. Y MEDITERRÁNEA SUR SISTEMAS DE CABLE, S.A., CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 11 DE MARZO DE 2004, POR LA QUE SE PROCEDIÓ A LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCESIONES PROVISIONALES HABILITANTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, CUYA TITULARIDAD OSTENTABAN LAS SOCIEDADES QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO DE LA CITADA RESOLUCIÓN, EN LAS CORRESPONDIENTES AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS HABILITANTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN POR CABLE EN EL MISMO ÁMBITO TERRITORIAL.

En relación con el recurso potestativo de reposición interpuesto por las entidades CABLEUROPA, S.A.U., REGIÓN DE MURCIA DE CABLE, S.A.U., VALENCIA DE CABLE, S.A., MEDITERRÁNEA NORTE SISTEMAS DE CABLE, S.A. Y MEDITERRÁNEA SUR SISTEMAS DE CABLE, S.A. contra la Resolución de 11 de marzo de 2004, por la que se procedió a la transformación de las concesiones provisionales habilitantes para la prestación del servicio de televisión por cable, cuya titularidad ostentaban las sociedades que se relacionan en el Anexo de la citada Resolución, en las correspondientes autorizaciones administrativas habilitantes para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable en el mismo ámbito territorial, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha adoptado, en su sesión núm. del día de la fecha, la siguiente Resolución:



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Resolución de de de 2004, recaída en el expediente AJ 2004/1182.

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 11 de marzo de 2004, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, dictó Resolución por la que se procedía a la transformación de las concesiones provisionales, habilitantes para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable, cuya titularidad ostentaban las entidades que se relacionaban en el Anexo de la misma Resolución, en las correspondientes autorizaciones administrativas habilitantes para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable.

SEGUNDO.- Con fecha 2 de julio de 2004, se recibió en esta Comisión escrito presentado por Doña María Consuelo Roger Rull, por medio del cual interpone, en nombre y representación de las entidades CABLE EUROPA, S.A.U., REGIÓN DE MURCIA DE CABLE, S.A., VALENCIA DE CABLE, S.A., MEDITERRÁNEA NORTE SISTEMAS DE CABLE, S.A. y MEDITERRÁNEA SUR SISTEMAS DE CABLE, S.A. recurso potestativo de reposición por el que impugna parcialmente la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a la que se refiere el antecedente anterior. En concreto, el recurso se interpone:

- a) Contra el apartado séptimo de la Resolución, en la medida en que no prevé como causa de extinción de las autorizaciones resultantes de la transformación, lo previsto en la Disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (en adelante, Ley 50/1998), según la cual:

“Las empresas operadoras de televisión por cable a las que se refiere el apartado 4 de la Disposición Transitoria primera de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, reguladora de las Telecomunicaciones por Cable, que se encontrasen en explotación comercial en una determinada localidad, podrán continuar realizando esa actividad hasta que una entidad que hubiese obtenido la oportuna concesión para la prestación del servicio comience a ofrecerlo en aquélla y así se acredite mediante acta levantada por la Inspección de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento”.

- b) Contra el Anexo de la Resolución impugnada, en la medida en que se incluyen dentro del mismo a las entidades TELE ALHAMA, S.L. (en adelante, TELE ALHAMA) y TELE SATÉLITE MAZARRÓN, S.L. (en adelante, TELE SATÉLITE MAZARRÓN).

Tras solicitar la admisión del recurso a trámite, la entidad recurrente, pide que se dicte una nueva resolución por la que se declare:



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

1. En relación con el apartado Séptimo de la Resolución:
 - a) Su invalidez en la medida en que no establece como causa de extinción de las autorizaciones resultantes de la transformación, la consistente en la aplicación de lo previsto en la Disposición adicional cuadragésimo cuarta de la Ley 50/1998.
 - b) Que las señaladas autorizaciones se extingan en el momento en el que, de conformidad con dicha Disposición adicional, aquella de sus representadas que en cada caso proceda comience a ofrecer el servicio de televisión por cable en la correspondiente localidad y así se acredite mediante acta levantada por la Inspección pertinente.
2. En relación con el Anexo de la Resolución de 11 de marzo de 2004, la invalidez de la inclusión dentro del mismo de las entidades TELE ALHAMA y TELE SATÉLITE MAZARRÓN y, en consecuencia, la invalidez de las autorizaciones para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable que se ha otorgado a dichas sociedades en virtud de la citada Resolución.

TERCERO.- Mediante escrito de fecha 1 de agosto de 2004, que tuvo entrada en el Registro de esta Comisión el día 5 de agosto de 2004, Don Jose Mateo Guerrero Lucas, en nombre y representación de la entidad TELE ALHAMA, formula las siguientes alegaciones sobre el recurso potestativo de reposición interpuesto por CABLE EUROPA, S.A.U. y las demás entidades:

- a) Extemporaneidad del recurso al haberse interpuesto meses después de haber transcurrido el plazo de 1 mes desde la fecha de la Resolución impugnada, y haberse publicado la misma en la página web de la Comisión.
- b) Falta de resolución administrativa que hubiera extinguido su concesión provisional y cancelado la inscripción en el Registro Especial de Operadores del Cable.
- c) Inadecuación con el régimen liberalizado instaurado en la nueva Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante, LGTel) de la extinción de las autorizaciones resultantes de la transformación por las causas previstas en la Disposición Adicional Cuadragésimo Cuarta de la Ley 50/1998.

CUARTO.- Con fecha 6 de agosto de 2004 tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito de fecha 3 de agosto de 2004, presentado por Don Policarpo Sánchez Ortiz, en virtud del cuál formula, en nombre y



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

representación de la entidad TELESATÉLITE MAZARRÓN, las siguientes alegaciones sobre el recurso potestativo de reposición interpuesto por CABLE EUROPA, S.A.U. y las demás entidades:

- a) Extemporaneidad del recurso al haberse interpuesto meses después de haber transcurrido el plazo de de 1 mes desde la fecha de la Resolución impugnada, y haberse publicado la misma en la página web de la Comisión.
- b) Posibilidad de la coexistencia de la titularidad de una concesión provisional y una concesión especial para prestar servicios en el mismo ámbito territorial, sin que exista resolución alguna que hubiera extinguido su concesión provisional. Entiende que las dos concesiones deben transformarse en autorización administrativa.
- c) Inadecuación con el régimen liberalizado instaurado en la LGTel de la extinción de las autorizaciones resultantes de la transformación por las causas previstas en la Disposición Adicional Cuadragésimo Cuarta de la Ley 50/1998.

A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Fundamentos jurídicos procedimentales.

PRIMERO.- Calificación del escrito.

El artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC) establece que contra las resoluciones (entre otros actos) podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de dicha Ley.

A su vez, el artículo 116.1 de la LRJPAC establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Las recurrentes califican expresamente su escrito de fecha 2 de julio de 2004, con entrada en el Registro de esta Comisión el mismo día, como recurso de reposición, por lo que teniendo en cuenta lo anterior y que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.17 de LGTel, las Resoluciones de esta Comisión ponen fin a la vía administrativa procede, a tenor de lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, calificar al escrito presentado como recurso potestativo de



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

reposición que se interpone contra la Resolución de esta Comisión de fecha 11 de marzo de 2004.

SEGUNDO.- Competencia para resolver.

La competencia para resolver el presente recurso de reposición corresponde, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la LRJPAC, al Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por ser el órgano administrativo que dictó el acto impugnado.

TERCERO.- Plazo de interposición del recurso de reposición.

Sostienen las entidades TELE ALHAMA y TELE SATÉLITE MAZARRÓN que el recurso de reposición interpuesto es extemporáneo, al haberse presentado el día 2 de julio de 2004 y, por tanto, varios meses después de adquirir firmeza la Resolución impugnada, que además se incorporó a un registro público y de libre acceso para cualquier persona, y se publicó en la página web de la Comisión.

Frente a lo expuesto por las entidades TELE ALHAMA y TELE SATÉLITE MAZARRÓN, cabe señalar que ni las entidades recurrentes especifican en su recurso ni consta en esta Comisión la fecha en la que aquéllas tuvieron conocimiento de la Resolución recurrida y a partir de la cuál hubiera tenido que computarse el plazo de un mes que establece el artículo 117 de la LRJPAC para la interposición del recurso de reposición, por lo que ha de entenderse, como ya ha señalado esta Comisión en diversas ocasiones, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 58.3 de la LRJPAC, la Resolución recurrida surtiría sus efectos a partir de la fecha en que los interesados realizaran actuaciones que supusieran el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interpusieran cualquier recurso que procediera.

Por ello, no existiendo constancia de que las entidades recurrentes hubieran tenido conocimiento de la Resolución recurrida con más de un mes de antelación a la fecha en que han interpuesto su recurso, ha de admitirse el recurso de reposición presentado.

Conviene precisar que en este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia, al señalar que *“para estimar extemporáneo en el procedimiento administrativo un acto de parte interesada, en este caso un recurso, frente a otro de la Administración forzosamente tiene que conocerse con precisión la fecha en que tuvo conocimiento de éste el interesado; sin que quepa hacer deducciones acerca de si a través de otras diligencias, actuaciones o expedientes, pudo conocer el objeto y alcance del acto recurrible que no le haya sido notificado (...); conocimiento de unos visados por el Colegio de Arquitectos que no le fueron notificados, por no ser parte en el expediente, y de los que tuvo posterior noticia, por lo que no procede dar lugar a la inadmisibilidad del recurso, una vez estimada su legitimación para recurrir contra dichos visados, de los que no*



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

existe certeza en el expediente de cuando tuvo el demandante el necesario conocimiento.” (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 14 de enero de 1992, F J 1º, Ar. 596).

CUARTO.- Admisión a trámite.

El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha en la que las entidades recurrentes han tenido conocimiento de la Resolución impugnada, previsto en el artículo 117 de la LRJPAC y cumpliendo con todos los requisitos de forma establecidos en el artículo 110.1 de la misma Ley, por lo que debe entenderse interpuesto en tiempo y forma procediendo su admisión a trámite.

II.- Fundamentos jurídicos materiales.

PRIMERO.- Sobre la invalidez del apartado Séptimo de la Resolución impugnada.

Se alega la invalidez del apartado séptimo de la Resolución impugnada por cuanto que, a juicio de las recurrentes, vulnera lo dispuesto en la Disposición transitoria décima de la LGTel al desconocer el concepto mismo de transformación empleado por la citada Disposición transitoria. Según las recurrentes, la transformación prevista en la Ley no puede afectar a los elementos esenciales del título transformado, que, en todo caso, comprenden los servicios a prestar, el ámbito territorial de tal prestación y el ámbito temporal de la misma. A tal efecto, entienden que la Resolución impugnada no ha tenido en cuenta convenientemente la finalidad del régimen transitorio diseñado por el legislador que es la de mantener el *status quo* hasta el 31 de diciembre de 2009, permitiendo a los operadores adjudicatarios de los concursos convocados al amparo de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable (en adelante, Ley del Cable) amortizar las cuantiosas inversiones realizadas y obtener una posición competitiva en el mercado acorde con éstas. A su juicio, tal finalidad se desatiende por la Resolución objeto de recurso, al permitir seguir operando, sin limitación temporal alguna, a los operadores que no resultaron adjudicatarios de concursos y que simplemente se vieron tutelados durante un período transitorio al objeto de poder amortizar sus propias inversiones.

Frente a lo expuesto por las recurrentes, cabe señalar que hasta la entrada en vigor de la LGTel, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la parcialmente derogada Ley del Cable, los servicios de difusión por cable tenían la naturaleza jurídica de servicios públicos, de modo que la gestión indirecta de dichos servicios, por parte de entidades privadas, requería de la previa obtención de la correspondiente concesión administrativa otorgada por la Administración titular del servicio que se iba a prestar.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Sin embargo, la naturaleza pública de estos servicios ha sido suprimida por la Disposición adicional décima de la LGTel en la que se produce la *despublicatio* de tales servicios en los siguientes términos:

“Los servicios de difusión de radio y televisión por cable se prestarán en régimen de libre competencia, en las condiciones que se establezcan por el Gobierno mediante reglamento. Para su prestación en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma será preceptiva la previa obtención de una autorización administrativa estatal y su inscripción en el registro que a tal efecto se llevará en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Los operadores cuyo ámbito territorial de actuación no exceda del correspondiente al de una comunidad autónoma deberán solicitar la autorización al órgano competente de la misma. Dichas autorizaciones se inscribirán en los registros establecidos al efecto por cada comunidad autónoma. Tales inscripciones deberán comunicarse al registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a efectos meramente informativos.

(...)”

En atención a la citada Disposición adicional, la prestación de estos servicios por los particulares ya no requiere de la previa obtención de una concesión administrativa sino de una autorización administrativa otorgada, según el ámbito territorial de extensión del servicio, por la Administración General del Estado, o por el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma.

No obstante la privatización del servicio operada, la Disposición transitoria décima establece una moratoria para el otorgamiento de nuevas autorizaciones, hasta el 31 de diciembre de 2009, salvo que el Gobierno a partir del 31 de diciembre de 2005 y previo informe de esta Comisión considere conveniente modificar el término de la misma. Lo anterior es sin perjuicio de que, una vez aprobado el Reglamento a que se refiere la Disposición adicional décima, se puedan otorgar nuevas autorizaciones en las demarcaciones constituidas conforme a la Ley del Cable en las que los concursos convocados al amparo de la citada Ley hayan quedado desiertos.

Para posibilitar que el servicio se siga prestando por los operadores habilitados hasta el momento para la prestación de los servicios de difusión por cable, la misma Disposición transitoria décima dispone un sistema de transformación inmediata de los anteriores títulos a cargo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en los siguientes términos:

“Los títulos habilitantes otorgados para los servicios de difusión de radio y televisión por cable y los que se encuentren en proceso de otorgamiento al amparo de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable, se transformarán de manera inmediata por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en la



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

correspondiente autorización administrativa. Si el ámbito territorial de actuación del servicio no excediera del correspondiente a una comunidad autónoma, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones comunicará al órgano competente de la comunidad autónoma la transformación en autorización administrativa. Hasta que se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición adicional décima de esta ley, a las autorizaciones que resulten de la transformación prevista en el párrafo anterior les serán de aplicación los artículos 10.1, 10.2 y 12 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre de Telecomunicaciones por Cable.”

En atención a todo lo anterior, aquellos operadores que, con anterioridad a la entrada en vigor de la LGTel, hubieran obtenido títulos habilitantes para prestar el servicio de difusión por cable podrán continuar prestando el citado servicio, ya que desde la entrada en vigor de la LGTel tales operadores tenían derecho a la transformación inmediata de su título en una autorización administrativa.

Como es bien sabido, a la entrada en vigor de la LGTel existían vigentes varios tipos de títulos habilitantes para la prestación de servicios de televisión por cable: i) concesiones definitivas, ii) concesiones provisionales, iii) habilitaciones ex lege y iv) concesiones especiales. No obstante, como señalan las entidades TELE ALHAMA y TELE SATÉLITE MAZARRÓN, la norma que prevé la transformación no hace distinción alguna en cuanto a estos tipos de títulos sino que los engloba a todos en el concepto de “*títulos habilitantes otorgados*”.

A la vista de lo anterior, debemos entender que la norma ha querido que se transformen en el mismo tipo de autorizaciones, con los mismos derechos y obligaciones, todos los tipos de habilitaciones que venían amparando, antes de la entrada en vigor de la nueva LGTel, el servicio de difusión de televisión por cable, cualquiera que fuera su origen y/o naturaleza jurídica.

Nótese que si la norma hubiera querido referirse sólo a las concesiones definitivas otorgadas de conformidad con los concursos convocados al amparo de la derogada Ley del Cable o si hubiera querido establecer regímenes diferentes para unos y otros tipos de títulos, así lo habría contemplado expresamente. Es más, el hecho de que la Disposición transitoria décima se refiera al concepto de “*títulos habilitantes*” y no al concepto de “*concesiones*”, ha permitido transformar en las correspondientes autorizaciones administrativas a la habilitaciones “*ex lege*” y a aquellas concesiones provisionales y especiales que habiendo agotado su período de vigencia hubieran continuado amparando la prestación del servicio por no haber, el concesionario definitivo, iniciado la prestación del servicio en un ámbito territorial coincidente con el de la concesión provisional, “*ex lege*” o especial.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la “*despublicatio*” del servicio se ha producido de forma automática con la entrada en vigor de la nueva LGTel. Desde ese momento, ha quedado derogado el régimen de derechos exclusivos que amparaba a los titulares de las concesiones definitivas. Por lo tanto, desde



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

la entrada en vigor de la Ley, ningún operador que preste el servicio al amparo de un título obtenido de conformidad con la normativa anterior, podrá ser obligado a cesar en la actividad ni aún en el caso de que inicie la prestación del servicio un operador que viniera habilitado por una concesión definitiva, ya que estas concesiones se han extinguido automáticamente con la entrada en vigor de la nueva LGTel y la prestación del servicio se encuentra ahora liberalizada.

Lo anterior no se opone en absoluto al régimen transitorio establecido en la Disposición transitoria décima de la LGTel, ya que la finalidad del mantenimiento del *status quo*, que las recurrentes atribuyen a la citada disposición, ha de predicarse de la situación del sector en su conjunto, esto es, la situación de todos los operadores con título a la entrada en vigor de la LGTel, o, lo que es lo mismo, a la situación en el sector operante en el momento de producirse la privatización del servicio. A este respecto, ha de tenerse en cuenta que la transformación de las concesiones denominadas “definitivas” ha supuesto, como hemos dicho, la derogación del régimen de derechos exclusivos de estos operadores, así como la eliminación de las obligaciones y compromisos a los que estaban obligados en su condición de adjudicatarios de los respectivos concursos públicos convocados al amparo de la Ley del Cable.

Precisamente, el régimen de acceso a través de concursos públicos, con el otorgamiento de derechos exclusivos y su contrapartida de obligaciones, era el que daba carta de naturaleza a la previsión normativa que permitía la competencia restringida en el sector a favor de los operadores titulares de las concesiones definitivas. Mantener este régimen de competencia restringida, como reclaman las recurrentes, haría necesario el mantenimiento de las obligaciones establecidas en los concursos públicos por los que se otorgaron las respectivas concesiones, incluido el plazo de 25 años de duración de la concesión definitiva, así como, los avales, garantías, compromisos de calidad, de inversión, entre otros, previstos en los mismos.

En cuanto al procedimiento para la transformación, la LGTel no prevé ninguno de forma específica. Las únicas previsiones que establece son que la transformación sería realizada de forma inmediata por esta Comisión y que, si el ámbito territorial de actuación del servicio no excediera del correspondiente a una comunidad autónoma, esta Comisión debía comunicar al órgano competente de cada comunidad autónoma la transformación en autorización administrativa practicada.

Por lo que se refiere a las condiciones que se pueden establecer en las autorizaciones administrativas resultantes de la transformación, el párrafo segundo de la Disposición transitoria décima establece que *“hasta que se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición adicional décima de esta Ley, a las autorizaciones que resulten de la transformación prevista en el párrafo anterior les serán de aplicación los artículos 10.1, 10.2 y 12 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre de Telecomunicaciones por Cable.”* Esto es, las condiciones relativas a la obligación de transmitir programas audiovisuales



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

propiedad de programadores independientes y las relativas a los contenidos de la programación con respecto a la protección de la juventud y de la infancia y otros bienes o derechos protegidos.

Por otra parte, en cuanto a la programación, resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley 25/1994, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CE sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio. Esta Ley, que sigue vigente, establece en su artículo 2.1 que se aplica a las emisiones de televisión realizadas por los operadores de televisión establecidos en España.

Finalmente, los titulares de las autorizaciones deberán cumplir con las obligaciones en materia de acceso condicional, acceso a determinados servicios de radiodifusión y televisión, televisión de formato ancho y obligaciones de retransmisión que, en su caso, se le puedan imponer de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional séptima de la Ley General de Telecomunicaciones. No obstante, hasta que se desarrollen reglamentariamente los apartados 1 y 2 de la citada Disposición adicional, deberán cumplir, en la prestación del servicio, las obligaciones contenidas en la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que se incorpora al derecho español la Directiva 95/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector, modificada por el Real Decreto Ley 16/1997, de 13 de septiembre.

Por tanto, las normas que regulan la transformación de las citadas concesiones, sólo regulan, como elementos esenciales determinadas obligaciones a las que se ha hecho referencia más arriba, pero, en ningún momento se refiere al ámbito temporal de la autorización. Todo ello, sin perjuicio de lo que al respecto diga el Reglamento a que se refiere la Disposición adicional de continua referencia. Circunstancia esta que se pone de manifiesto en el apartado tercero *in fine* de la propia Resolución impugnada.

SEGUNDO.- Sobre la invalidez del Anexo de la Resolución impugnada.

a) En relación con la inclusión en el Anexo de la entidad TELE ALHAMA.

Las entidades recurrentes cuestionan la procedencia de la transformación del título de la entidad TELE ALHAMA, al entender que, en virtud de lo establecido en la Disposición adicional cuadragésimo cuarta de la Ley 50/1998, y al haber iniciado su actividad la entidad concesionaria REGIÓN DE MURCIA DE CABLE, S.A. en las localidades de Alhama de Murcia y de Lorca, según se acredita mediante Acta emitida por la inspección de telecomunicaciones del Ministerio de Fomento de 18 de febrero de 2003, cuya fotocopia se adjunta, el título de TELE ALHAMA se encontraba ya extinguido a la entrada en vigor de la LGTel.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Frente a ello, señala la entidad TELE ALHAMA en su escrito de alegaciones que para que se hubiera producido la extinción de su título habilitante hubiera sido necesaria una resolución que hubiese procedido a la extinción de su título habilitante así como a la consiguiente cancelación de la inscripción efectuada en el Registro Especial de Operadores de Cable, alegando que en el presente caso no se había dado ninguna de estas dos circunstancias.

Pues bien, frente a lo expuesto por la entidad TELE ALHAMA, cabe precisar que la Disposición Adicional Cuadragésimo Cuarta de la Ley 50/1998 no exige la existencia de una resolución administrativa previa que extinga la concesión provisional. De acuerdo con dicho precepto, la concesión provisional que ostentaba TELE ALHAMA quedó extinguida *ex lege* una vez que la entidad REGIÓN DE MURCIA DE CABLE, S.A. comenzó a ofrecer el servicio en la misma localidad, lo que debería acreditarse mediante acta levantada por la Inspección de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento.

A este respecto, con fecha 14 de abril de 2003, tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito del Subdirector General de Inspección y Supervisión, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, al que se acompañaba copia autenticada del Acta de 18 de febrero de 2003 de entrada en servicio de la red de telecomunicaciones por cable correspondiente al municipio de Alhama de Murcia cuyo titular es la entidad REGIÓN DE MURCIA DE CABLE, S.A.

Mediante escrito de fecha 23 de abril de 2003, del Director de Regulación de Operadores de esta Comisión, se puso en conocimiento de la entidad TELE ALHAMA que, con fecha 18 de febrero de 2003, se había levantado, por la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, Acta por la que se acreditaba la entrada en servicio de la red de telecomunicaciones de la empresa REGIÓN DE MURCIA DEL CABLE, S.A., en el municipio de Alhama de Murcia, por la que se prestaba entre otros, el servicio de televisión por cable. La citada comunicación fue recibida por TELE ALHAMA, el día 30 de abril de 2003, según consta en el acuse de recibo emitido por el Servicio de Correos que obra en el expediente.

De conformidad con lo anterior, y en aplicación de lo establecido en la Disposición adicional cuadragésimo cuarta de la Ley 50/1998, la red de televisión por cable de TELE ALHAMA no contaba con título habilitante válido a la entrada en vigor de la LGTel. Por lo tanto, tal y como señalan las recurrentes, no debió incluirse a la citada entidad en el Anexo de la Resolución de 11 de marzo de 2004, como entidad titular de una autorización administrativa para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable.

b) En relación con la inclusión en el Anexo de la entidad TELE SATÉLITE MAZARRÓN.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Aluden las recurrentes a la imposibilidad de que la entidad TELE SATÉLITE MAZARRÓN aparezca como entidad titular de una autorización resultante de la transformación de su anterior concesión provisional, cuando también figura como titular de una autorización para el mismo servicio y con el mismo ámbito de cobertura, resultante de la transformación de una anterior concesión especial, según resulta de la Resolución de esta Comisión de fecha 25 de marzo de 2004.

A este respecto, cabe señalar que la entidad TELE SATÉLITE MAZARRÓN era titular de una concesión provisional para prestar el servicio de televisión por cable en la localidad de Mazarrón (Murcia), otorgada por Resolución de la entonces Dirección General de Telecomunicaciones, de 28 de noviembre de 1996.

Posteriormente, mediante escrito de 27 de noviembre de 1997, recibido en esta Comisión el día 5 de diciembre del mismo año, la sociedad interesada solicitó ante esta Comisión el otorgamiento de una concesión especial a la que se refiere la Disposición transitoria primera del Real Decreto Ley 6/1996 y la vigente Disposición transitoria primera de la Ley 12/1997 que derogó el anterior Real Decreto-Ley. La citada solicitud se tramitó por medio del expediente CAB/ESP/025.

Con anterioridad, la sociedad interesada había presentado, ante la Secretaría General de Telecomunicaciones, del Ministerio de Fomento, sendos escritos, los días 30 de julio de 1996 y 20 de mayo de 1997, solicitando acogerse a los beneficios del párrafo primero de la Disposición transitoria primera del RD 6/1996 y de la Ley 12/1997.

Por Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de 30 de abril de 1998, se desestimó la solicitud presentada por dicha entidad para el otorgamiento de una concesión especial que le habilitara para seguir realizando la prestación del servicio de televisión por cable que venía explotando en la localidad de Mazarrón (Murcia). La desestimación se fundamentó en el incumplimiento por parte del solicitante de la obligación de participar en el concurso público para la adjudicación de una concesión para la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable en la demarcación territorial de la región de Murcia, de acuerdo con la Disposición transitoria primera de la Ley 12/1997.

Por Sentencia de 30 de mayo de 2000, dictada por la Sala 9ª de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se estimó el recurso interpuesto por TELE SATÉLITE MAZARRÓN contra la Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de 30 de abril de 1998, declarándola no ajustada a Derecho y, en consecuencia, reconociendo el derecho de TELE SATÉLITE MAZARRÓN a obtener una concesión especial no renovable por un plazo de hasta 10 años desde la solicitud de fecha 30 de julio de 1996. Esta Sentencia ha sido declarada firme por Sentencia de 1 de julio de



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

2002, dictada por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

En cumplimiento de la sentencia de 30 de mayo de 2000, TELE SATÉLITE MAZARRÓN resultó titular de una concesión especial para prestar el servicio de televisión por cable por un plazo de 10 años computados desde la fecha de la solicitud ante el Ministerio, el día 30 de julio de 1996, por lo que dicho título estaría vigente hasta el día 30 de julio de 2006.

Ahora bien, una vez inscrita en el Registro Especial de Operadores de Cable la citada concesión especial habilitante para la prestación del servicio de difusión por cable en la localidad de Mazarrón, dejó de estar vigente la concesión provisional que ostentaba la entidad TELE SATÉLITE MAZARRÓN para la prestación de dicho servicio, cuya inscripción debió cancelarse, no debiéndose haber llevado a cabo su transformación.

También procede, por lo tanto, estimar la alegación de las recurrentes para que se suprima del Anexo de la Resolución impugnada la inclusión de la entidad TELE SATÉLITE MAZARRÓN.

Por todo lo expuesto anteriormente, cabe concluir que, no debiéndose haber incluido en el Anexo de la Resolución impugnada a las entidades TELE ALHAMA y TELE SATÉLITE MAZARRÓN debe estimarse en este punto el recurso interpuesto y confirmar en lo demás la Resolución impugnada por resultar conforme a Derecho.

Vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, esta Comisión

RESUELVE

Primero.- Estimar parcialmente el recurso potestativo de reposición interpuesto por las entidades CABLEEUROPA, S.A.U., REGIÓN DE MURCIA DE CABLE, S.A.U., VALENCIA DE CABLE, S.A., MEDITERRÁNEA NORTE SISTEMAS DE CABLE, S.A. Y MEDITERRÁNEA SUR SISTEMAS DE CABLE, S.A. contra la Resolución de 11 de marzo de 2004, por la que se procedió a la transformación de las concesiones provisionales habilitantes para la prestación del servicio de televisión por cable, cuya titularidad ostentaban las sociedades que se relacionan en el Anexo de la citada Resolución, en las correspondientes autorizaciones administrativas habilitantes para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable en el mismo ámbito territorial, en la medida en que no debió haberse incluido en dicho Anexo a las entidades TELE ALHAMA, S.L. y TELE SATÉLITE MAZARRÓN, S.L.

Segundo.- Confirmar el resto del contenido de la Resolución impugnada por estar plenamente ajustada a derecho.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente certificado, que estima parcialmente un recurso potestativo de reposición, no puede interponerse de nuevo dicho recurso de reposición. No obstante, contra la misma puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición Adicional Cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

EL SECRETARIO

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Jaime Velázquez Vioque

Carlos Bustelo García del Real